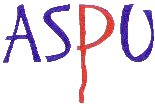
**ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU**



**Personería Jurídica No.0623 del 4 de Mayo de 1966 del Ministerio de Trabajo**

**Frente a las pasadas elecciones de decanos a algunas facultades de la UTP**.

Si bien la inconformidad por gran parte de la comunidad educativa de la UTP, frente a la forma como se eligen los Decanos y Directores de las diferentes facultades y Programas, se generó desde la administración pasada con el acuerdo No 06 del 29 de febrero de 2008, que le quitó la potestad a profesores, estudiantes y egresados de elegir mediante votación libre en una proporción igualitaria para cada una de las partes, la continuidad que la administración actual le da a este Acuerdo, sigue generando malestar en el grueso de la comunidad universitaria. La disposición de esta norma despoja de autonomía a las facultades y le adjudica el 34% de los votos al Consejo Superior.

Las pasadas elecciones de decanos de las facultades así lo demuestran; la perpetuación de ciertos docentes en cargos directivos y la desproporción en el sistema de elección de decanos: un voto del Consejo Superior equivale alrededor de 60 votos de los estudiantes y a 10 votos de los profesores, muestran el desequilibro y ausencia de democracia en este sistema de elección, aunado a ello, la falta de voluntad y de validez en las consultas internas de las escuelas no lleva más que a los resultados arrojados en algunas de las facultades: es el Consejo Superior quien desequilibra la balanza y elige al decano. El caso más contundente se pudo observar en la facultad de Educación.

Aunque la actual administración ha manifestado su respaldo a los decanos elegidos, bajo el argumento de la legalidad de las mismas, es necesario manifestar que la legalidad en un acto no conlleva la legitimidad del mismo, lo moral no está contenido en lo legal. Fue la administración anterior quien definió de manera arbitraria los porcentajes que consideró adecuados y se atribuyó la potestad para establecer que es lo legal e ilegal, sin contemplar la voluntad de todas las partes involucradas.

Un orden legal legítimo, debe estar acompañado por un reconocimiento y merecimiento de la comunidad en la que se funda, situación ajena en las pasadas elecciones. Las manifestaciones de inconformidad y de rechazo vehemente y contundente que se presentaron durante todo el proceso electoral, por el grueso de los estudiantes en la Facultad de Educación, así lo demuestran.

Esto nos lleva a interpelarnos ¿por qué los decanos elegidos son adecuados para emplear el poder que se les atribuye, en forma tal que representen los valores constitutivos de la comunidad universitaria?

Uno de los rasgos de la crisis de legitimidad que mantuvo la administración anterior, entre otros muchos, está vinculado al acuerdo 06 de febrero de 2008, el cual hereda la Administración actual de la UTP y le da continuidad.

El debate sigue estando al orden del día, es necesario recuperar la autonomía universitaria, abrir espacios democráticos al interior de la UTP y regresar al acuerdo 39 de 1994, que establecía igualdad de porcentaje, entre profesores, estudiantes y egresados; establecer periodos para cargos directivos de Facultades, Departamentos, Programas, Maestrías y Posgrados y no admitir la eternización de estas administraciones, las cuales no generan la renovación de ideas y prácticas; devolver la autonomía a las unidades académicas y salas de profesores, para que un perfil académico, en cualquier concurso, no sea definido por un solo docente o directivo, ni evaluado por una instancia ajena a los consejos de facultad.

El momento político por el que atraviesa el País, requiere de una política que abra espacios democráticos en todos los ámbitos, especialmente en el educativo, y se brinden las garantías reales para la construcción de una nueva política educativa.

La actual administración en una de las sesiones del Consejo Académico manifestó la disposición al cambio de reglas o su revisión. Es necesario que las construcciones discursivas pasen al terreno de las acciones y así demarcar una política distinta a la ejercida en la antigua administración, para no caer en el descrédito y deslegitimización que la acompañó durante todo su gobierno.

**JUNTA DIRECTIVA ASPU-UTP DICIEMBRE 2015**